

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

Fusagasugá, 28 de enero del 2022

EJECUTIVO

RADICADO No. 2529042030012019 00528 00
DEMANDANTE: Pablo Emilio Rojas Arévalo
DEMANDADO: Amanda Piñeros Suárez

SENTENCIA

Procede el Despacho a dictar sentencia anticipada dentro del litigio adelantado por **Pablo Emilio Rojas Arévalo** en contra de **Amanda Piñeros Suarez**, de conformidad con lo señalado por el artículo 278-2 del C.G.P.

PRETENSIONES

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que expone en el libelo genitor, mediante providencia de fecha 16 de octubre del 2019, se libró mandamiento de pago por las sumas solicitadas, las cuales incluyen capital con sus respectivos intereses moratorios, obligaciones contenidas en la letra de cambio adjunta.

HECHOS:

- 1.1. Que la señora **Amanda Piñeros Suárez**, aceptó a favor del demandante, el título valor letra de cambio por valor de \$8.888.000.00, en calidad de mutuo o préstamo.
- 1.2. Que el plazo se encuentra vencido y la demandada no ha cancelado ni el capital ni los intereses moratorios a que se obligó.
- 1.3. Que título valor contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

DE LA PARTE DEMANDADA

Dentro del término de traslado, la demandada, fue notificada a través de curador ad- litem, quien contestó la demanda y presentó la excepción de mérito titulada "PRESCRIPCIÓN".

Como fundamento de la citada excepción refirió que, la letra base de ejecución tiene como fecha de vencimiento el 4 de septiembre del 2016,

por lo que al 3 de septiembre del 2019, habría prescrito la acción ejecutiva; no obstante, fue presentada la demanda y admitida el 16 de octubre del 2019, y para notificarla contaba con un año, sin embargo, desde la admisión a la notificación han transcurrido otros dos años.

ACTUACIÓN PROCESAL

Por auto dictado el 16 de octubre del 2019, este Juzgado de un lado, libró la orden de pago en concordancia con lo pedido en la demanda; y del otro, dispuso notificar el mencionado auto a la pasiva, correr el traslado respectivo.

Ante la imposibilidad de notificación personal, la demandada fue notificada a través de curador ad litem, el pasado 22 de septiembre del 2021, quien contestó la demanda y presentó excepción de mérito.

De la oposición aludida, se corrió traslado a la parte demandante, quien no hizo uso del derecho a contradecir el argumento de la pasiva.

Enseguida, mediante auto de fecha 29 de octubre del 2021, el juzgado estimó aplicable la regla consagrada en el Art. 278-2 del C.G.P., por lo que ingresa el expediente al Despacho a fin de tener en cuenta las pruebas documentales aportadas por las partes, y dictar sentencia anticipada.

Historiado así el desarrollo del proceso, corresponde entonces a esta funcionaria dictar la respectiva sentencia anticipada, desde luego, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

En lo que respecta a los presupuestos procesales, deba decirse que ningún reparo debe formularse sobre el particular. En efecto, la demanda iniciadora del debate es apta formalmente, los intervinientes ostentan capacidad procesal para ser parte y, este despacho judicial es competente para conocer del asunto habida cuenta los factores que la determinan.

De otra parte, revisada la actuación, no se encuentra vicio o causal de nulidad alguna que pueda invalidar total o parcialmente la actuación surtida y/o que conlleve a decisión inhibitoria; por ello, es procedente adelantar el estudio de fondo sobre la cuestión planteada con esta demanda.

Señala el artículo 422 del Código General del Proceso que pueden demandarse ejecutivamente todas las obligaciones expresas, claras y actualmente exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, lo mismo que las que constituyan plena prueba contra él.

En esta oportunidad, la parte actora aportó un título valor letra de cambio, según el cual la demandada Amanda Piñeros Suárez, se obligó a pagar a favor del señor Pablo Emilio Rojas Arévalo, la suma de \$ 8.888.000, en calidad de mutuo y los intereses moratorios que se generaran.

Sobre esta base, no cabe la menor duda que el documento aportado tiene las siguientes características: (i) una letra de cambio, sujeta a los requerimientos generales del artículo 621 del Código de Comercio y especiales para esa especie, consagrados por el 671 de la misma codificación; (ii) Contiene, respecto a los presupuestos que gobiernan ese título, el nombre del girado, la forma del vencimiento y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador; y en torno a los primeros se menciona el derecho que el mismo título incorpora y la firma de quien lo acepta.

De esta manera, se está en presencia de obligaciones claras, expresas y exigibles provenientes de la demandada (art. 422 del C.G.P.), quien por su propia cuenta no formuló alguna crítica por la firma allí impuesta, gozando por lo tanto de la presunción de autenticidad a que se refiere el artículo 793 del Código de Comercio.

De otra parte, el no pago es un hecho negativo que no admite demostración para quien hace tal aseveración pues, además de su carácter negativo, tiene la calidad de indefinido, dada la periodicidad de los pagos. Por tanto, si la contraparte quiere exonerarse de tal afirmación, debe acompañar la prueba de ello.

Llegados a este punto, abordemos la excepción que planteó la pasiva, no sin antes recordar que para el éxito de las mismas, es necesario que el proponente pruebe cada uno de los supuestos facticos que le sirven de soporte, pues bien es sabido que es principio universal, en materia probatoria, que le corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de supuesto. *En caso contrario, deberá sufrir los efectos de incumplimiento de dicha carga, que no son otros que los resultados jurídicos perseguidos resulten adversos"*¹

DE LAS EXCEPTIVAS PROPUESTAS

Prescripción.

Se tiene que para el colaborador de la justicia, la acción ejecutiva presentada por el demandante Pablo Emilio Rojas Arévalo, prescribió, con antelación a la presentación de la demanda, toda vez que la barrera de los tres años para hacer efectiva la acción cambiaria, aunado al hecho de no haber notificado el mandamiento de pago a la demandada dentro del año al que se refiere el art. 94 del CGP.

Perfilada la polémica, esta titular debe responder al siguiente problema jurídico:

¿La acción ejecutiva instaurada por la parte actora prescribió, se encontraba prescrita al momento de presentación de la demanda? o en particular, ¿porque no se notificó al demandado dentro del año al que se refiere el Art. 94 del CGP?

¹ Corte Suprema de Justicia, sentencia febrero 13 de 1985 Horacio Montoya Gil.

Para resolver este problema, se considera lo siguiente:

La prescripción se establece como un mecanismo de defensa aceptado en nuestra ordenación legal, el cual tiene un doble carácter: **adquisitivo**, cuando por la posesión y el transcurso del tiempo se adquieren las cosas ajenas; y **extintivo**, cuando por el sólo devenir del tiempo se extinguen los derechos y acciones de otros. En tal orden de ideas y para la decisión que aquí se intenta, resulta de interés la segunda de tales formas.

Al tenor del artículo 2535 del C.C., la prescripción que extingue las acciones o derechos de otros, exige sólo el transcurso de cierto lapso que, en cada caso, es fijado expresamente por el legislador. Es así como, para el caso de las letras de cambio, el artículo 789 del Código Comercio determinó que es de tres (3) años el término prescriptivo de la acción cambiaria directa, calculados a partir del día del vencimiento de la obligación ejecutada.

Ahora bien, el plazo prescriptivo puede interrumpirse bien civil o ya naturalmente (CC, art. 2539). Se interrumpe naturalmente, por el hecho del deudor de reconocer la obligación, mientras que opera de modo civil, por la demanda judicial y de manera novel (CGP, art. 94), por la amonestación escrita realizada al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento privado solo se permite utilizar por una sola vez.

Al respecto de la interrupción civil por demanda judicial, es importante recordar que esta figura opera cuando el acreedor cumple con los siguientes pasos: (i) instaura la demanda antes que se produzca la prescripción, o sea, en este caso antes de los 3 años que prevé la preceptiva citada; y (ii) notifica al demandado dentro del año siguiente a la fecha en que se intime por estado la orden de apremio al demandante (CGP, art. 94), pues pasado ese término, dice el inciso inicial de la preceptiva citada, los efectos de la interrupción solo se producirán con la notificación del demandado.

Sobre este último punto, valga explicar que en todo caso el acreedor puede lograr la interrupción de la prescripción, muy a pesar de no haber logrado intimar la orden de apremio dentro del año mencionado, sí y solo sí, notifica al demandado antes de que expire el plazo liberatorio, se repite, antes de los tres (3) años.

Sentadas estas reflexiones, y cotejada la letra de cambio base de esta ejecución, junto con el acontecer procesal, aprecia este Despacho que operó la prescripción extintiva de la acción cambiaria, y veamos porque:

Tomando como punto de partida la fecha de vencimiento del título objeto de examen, esto es, el 4 de septiembre del 2016, se tiene que la frontera del término de los tres años para el ejercicio de la acción cambiaria venció el 3 de septiembre del 2019, de lo que claramente se concluye conforme al precedente normativo, artículo 789 del Código de Comercio, que para el

46
momento de presentación de la demanda, esto es, el 11 de octubre del 2019², ya había operado la prescripción alegada.

Con arreglo a lo anterior, resulta innecesario el estudio del lapso establecido en el artículo 94 del CGP, para notificar al demandado, pues como previamente se advirtió, queda visto que la interrupción civil no operó, toda vez que la demanda fue presentada con posterioridad a la prescripción de la acción cambiaria y por tanto el acreedor debe soportar los efectos extintivos que el paso del tiempo previó para su crédito.

Sin más preámbulo, se declarará probada la excepción propuesta por la parte demandada, habida cuenta que en definitiva existen los suficientes elementos de convicción para reconocer como lo dijo la curador ad-litem que representa a la demanda, que en este asunto se operó la prescripción de la acción cambiaria.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Juez del Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: **DECLARAR PROBADA** la excepción denominada "**PRESCRIPCIÓN**", por lo expuesto en las consideraciones precedentes.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, **DECRETAR** la terminación del presente proceso.

Tercero: **DECRETAR** el levantamiento de las medidas cautelares ejecutadas con ocasión al trámite de éste proceso. Por secretaría ofíciase como corresponda.

Cuarto: **CONDENAR** en costas a la parte ejecutante; tásense por secretaría, e inclúyase la suma de \$540.000= como agencias en derecho, liquidadas conforme lo dispone el Art. 366 del C. G. del P, en armonía con el ACUERDO 10554 de agosto 5 de 2016, vigente a la fecha y expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

NOTIFÍQUESE


JOHANNA GUALTEROS GIL
Juez. -

JS

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGÁ

La anterior providencia, se notifica
por ESTADO ELECTRÓNICO, hoy 31 de
enero del 2022